

19995 *ORDEN 413/38699/1988, de 19 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 5 de octubre de 1987, en el recurso de apelación interpuesto por don Manuel Buitrón Fernández.*

Excmos. Sres.: En el recurso de apelación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una como demandante, don Manuel Buitrón Fernández, y de otra como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra sentencia de 11 de noviembre de 1985, dictada por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 990/1983, sobre nombramiento, se ha dictado sentencia, con fecha 5 de octubre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Manuel Buitrón Fernández, contra la sentencia de la excelentísima Audiencia Territorial de Madrid, Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la misma, de fecha 11 de noviembre de 1985, dictada en recurso número 990/1983, contra acuerdos del Consejo Superior del Ejército del Aire que declararon al recurrente no elegible para el empleo inmediato superior. Sin que haya lugar a una condena por las costas procesales causadas.

Así por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 19 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General del Mando de Personal del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

19996 *ORDEN de 13 de julio de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por don Angel Muñoz Alzola.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación interpuesto por don Angel Muñoz Alzola, contra la sentencia dictada en 15 de diciembre de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 24.103, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante, contra resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 21 de febrero de 1983, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Orden de Hacienda, de 4 de noviembre de 1982, por la que se le impuso una sanción económica de 750.000 pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 28 de diciembre de 1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que la apelación formulada por don Angel Muñoz Alzola contra la sentencia que el 15 de diciembre de 1984 dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda), de la Audiencia Nacional, debemos revocar y revocamos dicha sentencia, y, en su lugar, declaramos la nulidad de las Ordenes del Subsecretario de Economía y Hacienda firmadas los días 4 de noviembre de 1982 y 21 de febrero de 1983, por no ser conformes a derecho, todo ello sin pronunciamiento alguno respecto del pago de las costas procesales en ambas instancias.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1988. P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borell Fontelles.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.

19997 *ORDEN de 13 de julio de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por don José Álvarez Borrás.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación interpuesto por don José Álvarez Borrás, contra la sentencia dictada en 21 de diciembre de 1984, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante, contra Resolución del Ministerio de Hacienda, de fecha 5 de noviembre de 1982, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, de 22 de julio de 1982, sobre sanción de multa por cuantía de 80.000 pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 30 de enero de 1988, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que en la apelación formulada por don José Álvarez Borrás contra la sentencia que el 21 de diciembre de 1984 dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, debemos revocar y revocamos dicha sentencia, y, en su lugar, declaramos la nulidad de la Orden del Subsecretario de Economía y Hacienda, firmada el día 5 noviembre de 1982 y el acuerdo de la Delegación del Gobierno en la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, que lleva fecha 22 de julio de 1982, por no ser conforme a derecho; todo ello sin pronunciamiento alguno respecto del pago de las costas procesales en ambas instancias.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borell Fontelles.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.

19998 *ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Velur, Sociedad Anónima Laboral».*

Vista la instancia formulada por el representante de «Velur, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-58007667, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 2.712 de inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por las operaciones societarias de aumento de capital y de las que se originen por los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, así como las que tengan su causa en los actos de adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y